

## Obras en Lanzarote

Ramón Pérez Niz

Ricardo Santana

Hace unos meses que se inauguró la nueva carretera de Tahíche hacia el norte. Se invirtió una buena cantidad de dinero con el objetivo de que podamos ahorrarnos unos minutos en el trayecto y, a la par, se produjo un destroz en el territorio de consecuencias nada despreciables. Al poco tiempo, las primeras lluvias provocaron su inundación y desprendimientos en la carretera.

¿Era necesaria una intervención como la realizada? No. La reparación y rediseñamiento de la antigua carretera habrían bastado para cubrir las necesidades de movilidad motorizada; además de haber permitido dedicar gran parte de la inversión a las auténticas prioridades de la sociedad insular. ¿Contribuirá esa carretera a aumentar nuestra seguridad?

No. El incremento de la velocidad provocará que los accidentes que se produzcan puedan ser de mayor gravedad. ¿Es culpa exclusiva de los políticos, o algo tienen que ver en el asunto los técnicos que diseñaron la calzada? ¿Se decide hacer esa inversión para ahorrarnos los cinco minutos en el trayecto, o puede tener alguna relación con la corrupción imperante? ¿Era ridícula la postura de quienes se oponían al proyecto? ¿Lo hacían porque, como algunos piensan, tienen la costumbre de decir "no" a cualquiera de las intervenciones que se plantean? En resumen, ¿se han gestionado de la mejor forma posible los fondos públicos al destinarlos a la nueva carretera?

Éste no es más que un ejemplo, de los muchos que podrían utilizarse, para abordar uno de los principales objetivos de los políticos en esta isla: la obsesión por las obras. La política lanzaroteña, como la de otros lugares, se caracteriza por esa obsesión, y los proyectos políticos suelen estar destinados fundamentalmente a la obtención de fondos públicos que permitan abordar la realización de obras que puedan ser presentadas como emblemas de la gestión realizada. Lo curioso es que, en ocasiones, parezca que resulta más importante realizar la obra por sí misma que porque resuelva algún problema prioritario de la sociedad insular. La carretera mencionada no era, desde luego, una prioridad en Lanzarote, como no lo son muchas otras de las obras que se acometen.

Por lo tanto, puede decirse que el despilfarro es una de las características de la gestión política que

*El despilfarro es una de las características de la gestión política que se realiza en Lanzarote*

se realiza en Lanzarote. Sólo así puede entenderse que se cambien unas farolas recién instaladas en el Charco de San Ginés, o que se gaste el dinero en eliminar la conexión con el Islote de la Fermina sin atender a lo que ocurrirá en ese espacio poco después. Se plantea un concurso para intervenir en el Islote, primero se quita el paso, luego se construye un nuevo puente –horroroso, por cierto– y, después, se afrontará la intervención. El resultado es que el puente no tendrá nada que ver con lo que se haga en el Islote y, además, será estrenado por los camiones y máquinas que tendrán que cruzarlo para realizar las obras.

Este despilfarro se produce también por la obvia descoordinación entre las diferentes instituciones que actúan en la Isla. Hace un par de años se inauguraba la costosa obra del litoral de El Charco –realizada por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias– sin resolver las filtraciones ni la mejora de la circulación de las aguas; ahora, nuevamente el Gobierno de Canarias, desde la Dirección General de Aguas, tiene previsto poner el paseo patas arriba para arreglar el saneamiento. Porque aquella obra se hizo sin tener en cuenta ese problema, que ha convertido el emblemático espacio de la capital en un colector de residuos en el que bañarse resulta peligroso para la salud. Y lo mismo ocurre cuando vemos cómo tantas calles se levantan para renovar conducciones que deberían haberse acondicionado cuando se asfaltaron poco tiempo antes, coincidiendo normalmente con los períodos electorales. Debe ser que como se hace con prisas, no tienen tiempo

de coordinarse con las empresas de servicios públicos: Telefónica, Inalsa, Unelco, Aguas Filtradas...

Los vertidos de aguas residuales ejemplifican bien la preocupación real por los problemas ambientales de quienes han gestionado durante años las instituciones insulares, y sus preferencias a la hora de abordar las obras a las que se destinan los fondos de la comunidad. Aunque parezca increíble, los vertidos al mar sin depurar continúan siendo generalizados en esta Reserva de la Biosfera. En Arrecife podemos contemplar cómo esos vertidos se realizan junto a la costa sin que se haya puesto remedio al problema durante años. Ni siquiera se ha acometido la pequeña inversión que supondría arreglar o prolongar los emisarios. Hasta el punto de que junto a la playa de la ciudad, en la Punta del Camello, podemos contemplarlos cada día. Los dos únicos parques urbanos merecedores de tal nombre, la playa de El Reducto –bañarse en Arrecife se ha convertido en una actividad de riesgo– y el parque Temático, se ven afectados por esos vertidos ante la mirada impasible de los encargados de gestionar la cosa pública.

Y la razón no puede ser la falta de dinero. Como decíamos, arreglar ese problema no requiere mucho gasto. La cuestión más parece estar relacionada con que ese tipo de intervenciones, mucho más necesarias que otras, no les resultan a nuestros políticos tan impactantes o vendibles como las grandes obras. Motivo parecido es el que ha impedido que en Arrecife se haya acometido la principal intervención para embellecer la

***Una de las ventajas de las grandes obras es la facilidad con la que se detraen fondos para financiar a los partidos y sus campañas electorales***

ciudad y hacerla más vivible: es demasiado barato arbolar la ciudad. Los árboles no cuestan mucho dinero, así que no constituyen a sus ojos la gran obra que buscan. Y, además, cuando la inversión es escasa..., escasas son las comisiones.

Porque una de las ventajas de las grandes obras que obsesionan a nuestros políticos se relaciona también con la facilidad con la que se detraen fondos para financiar los partidos y sus campañas electorales. Los árboles o los emisarios apenas dejan dinero, y el que dejan es más complicado gestionarlo; mientras que para una carretera o una gran construcción, obras de muy elevado coste, resulta sencillo cuantificar y gestionar la comisión. Por cierto, ¿será ésta la explicación del excesivo incremento del coste final de las obras en relación con el presupuesto inicial, o es que los técnicos son incapaces de realizar correctamente sus cálculos?

La corrupción política se alimenta básicamente de las licencias de construcción y de las obras públicas, aunque a veces las cosas lleguen por caminos intrincados. En Arrecife, por ejemplo, el ayuntamiento entrega un espacio de los más emblemáticos de la ciudad a una empresa que necesita hacer un aparcamiento para el hotel que rehabilita, permitiéndole, además, una ocupación exhaustiva del solar en las dos primeras plantas, un incremento de la edificabilidad de la parcela y nuevos usos comerciales.

¿Resulta imaginable, en cualquier ciudad desarrollada, que se elimine un parque frente a su bahía marítima para proporcionarle el

terreno a una empresa privada que lo necesita para convertirlo en aparcamiento? ¿Las modificaciones permitidas por el ayuntamiento no producen una situación muy injusta de agravio comparativo con el resto de los edificios y solares de la zona? ¿Puede entenderse una actuación tan inaudita sin acudir a otras explicaciones?

No hacen falta, sin embargo, muchas explicaciones para entender la incapacidad para gestionar los bienes públicos que caracteriza a quienes dirigen y han dirigido ese ayuntamiento. Pongamos otro ejemplo: en Arrecife existe, y se reclama todavía hoy, la necesidad de una piscina pública. Podría contestarse que esa piscina se comenzó a construir, y se dejó a medias, hace ya bastante tiempo. ¿Qué ocurrió? Pues que, aunque resulte increíble, aquella piscina se demolió, el dinero tirado a la basura y, a día de hoy, se publicita una nueva y gran obra destinada a construir una piscina pública en un terreno colindante. Como se ve, la incapacidad de los gestores y la ausencia del más mínimo cuidado con los fondos públicos es de cuidado.

La incapacidad para gestionar adecuadamente se revela también en dos aspectos: en el excesivo tiempo empleado en desarrollar un proyecto –como las obras de rehabilitación del Castillo de San Gabriel y su entorno o las que se realizaron en el parque José Ramírez Cerdá– y en su calidad. Que una carretera se hunda a los pocos días de su inauguración no es más que un ejemplo. Pero hay otros; en realidad, son multitud. Al poco tiempo de presentar el paseo marítimo que nos lleva de

*Que una carretera se hunda a los pocos días de su inauguración no es más que un ejemplo*

*En este panorama de incompetencia algo deben de tener que ver las empresas y los técnicos que realizan las obras*

Playa Honda a Puerto del Carmen, su pavimento de madera se levanta sin rubor y el jable entierra buena parte del mismo. Las obras recientes provocan inundaciones con una facilidad realmente pasmosa en la capital insular, incluso en su calle más Real y en su parque más Temático. Y lo que no se inunda bien puede ser anegado por el próximo temporal del Sur.

Como es lógico, esta obsesión por las grandes obras, unida a la incapacidad en la gestión, tiene una consecuencia evidente: una vez inaugurada la obra, si te vi no me acuerdo. Es decir, que el mantenimiento no parece ser responsabilidad de nadie. Así, puede presentarse con altavoces una peatonalización en el centro de Arrecife, que, en vez de peatonalización parece un paseo de obstáculos, y nadie se preocupará por lo que allí ocurra, aunque sea delante de la Iglesia. Si el pavimento se levanta, pues seguirá levantándose durante un año, porque nadie acudirá a repararlo. Si se estropea uno de los bolardos móviles destinados a impedir el cruce de los automóviles por la calle Real, pues se tapa el agujero y se acabó, pero no se les ocurrirá repararlo. No hablemos de los chicles, excrementos de palomas y manchas de aceite en los adoquines recién colocados, ni del vergonzante espectáculo de los contenedores de basura. Y es que los políticos parecen ser de la opinión de que el mantenimiento de los bienes públicos no da votos ni, desde luego, dinero; una vez inaugurada la obra, trabajo concluido.

Cierto que en este panorama de incompetencia algo deben de tener que ver las empresas y los

técnicos que realizan las obras, pero este artículo se ha escrito para hablar sobre la actuación de nuestros políticos, que parecen empeñados en utilizar cualquier fondo público al que tengan acceso para construir lo que sea, sin atender a las auténticas necesidades presentes y futuras de la sociedad. Ahora bien, resulta que lo que más les obsesiona –las actuaciones a las que dedican sus mayores y mejores esfuerzos– contribuye a revelar su escaso nivel como gestores, y, además, al no tener una visión general o proyecto global de ciudad, parece que las obras públicas son aleatorias dependiendo del dinero que el político del área consiga y del libre albedrío de sus técnicos, y que no se persigue un objetivo concreto, esto es, que cada pequeña obra sume con otras para ir configurando, poco a poco y a lo largo del tiempo, el proyecto general de ciudad. Por eso no puede extrañar que el desgobierno caracterice hoy la actuación de la mayoría de las instituciones públicas en Lanzarote.